

sil hay 90.000, constituyen un reflejo vivo de las bases populares de la Iglesia, cuyos fundamentos descansan en la fraternidad, la solidaridad, la participación y la autoeducación.

Dichas tendencias se refuerzan y amplían con la participación militante de cristianos en movimientos populares. En algunos países, como el nuestro, ello se expresa en la formación de partidos que reconocen una inspiración cristiana.

Este fenómeno determina una ampliación de las vertientes del pensamiento revolucionario y fortalece las perspectivas de una conjunción de socialismo y democracia. No es extraño, entonces, verificar que en los procesos liberadores más importantes que abren esta década -Nicaragua y El Salvador- el aporte de compromiso y lucha de los cristianos sea no sólo importante sino decisivo.

Siempre fue cierto que del comportamiento de las masas cristianas dependía buena parte del resultado de los procesos revolucionarios del continente. Pero hoy entramos en una etapa en que la radicalización cada vez más amplia del pueblo cristiano viabiliza, fortalece y amplía las perspectivas del socialismo latinoamericano.

La Izquierda Cristiana de Chile, organización que ha sido fruto de ese proceso y ha crecido y madurado en él, ratifica su decisión de expresar en el seno del movimiento popular chileno, los valores y el compromiso de aquellos cristianos que entienden que en la lucha por derrocar a la dictadura y en los esfuerzos por construir una sociedad más justa y fraterna se realiza, políticamente, "una opción preferente por los pobres".

La Izquierda Cristiana llama a los religiosos, a los integrantes de comunidades de base, a los miembros de los movimientos sociales de la Iglesia, a quienes han trabajado por la vigencia de los derechos humanos y la solidaridad con los pobres y oprimidos, a considerar la necesaria dimensión política de la lucha y su ingreso a nuestro partido.

¡Por la liberación popular!

Organización de Izquierda  
Cristiana de Chile.

Marzo de 1980.

documento  
2° pleno comité central  
izquierda cristiana Chile  
marzo 1980.



## "A IMPULSAR LA LUCHA POR EL DERROCAMIENTO DE LA DICTADURA"

El Segundo Pleno del Comité Central de la Izquierda Cristiana aprobó el siguiente documento:

### 1. Nuestra decisión fundamental: asumir como responsabilidad propia el derrocamiento de la dictadura.

La situación política chilena se caracteriza hoy por dos rasgos fundamentales:

a) Los problemas del país se agravan. La mantención de la dictadura impone a Chile como nación y, en particular, a la mayoría de los sectores populares, perjuicios cada vez más grandes. Estos se traducen en la liquidación de las expectativas de desarrollo del país, en la quiebra de la unidad nacional y en la persistencia de una situación de represión sistemática y de extrema miseria para una parte importante del pueblo chileno.

b) Los sectores que expresan su oposición a la dictadura - pese a su fuerza potencial - no logran configurar un movimiento capaz de derrocarla y generar un nuevo gobierno. Contribuye a ello tanto la falta de un acuerdo entre la democracia cristiana y la izquierda como las insuficiencias de dirección de esta última. La ausencia de conducción política en el movimiento popular es uno de los factores que más ayuda a la dictadura. Ello le permite superar muchas de las contradicciones que, necesariamente, su modelo provoca.

En ese contexto, romper el inmovilismo ha pasado a ser el desafío más importante que las fuerzas de izquierda y la oposición en general enfrentan. Por nuestra parte, sin dejar de tener en cuenta nuestras limitaciones iniciales, tenemos la decisión de asumir desde ahora en plenitud, como responsabilidad propia, el derrocamiento de la dictadura. Esto significa, entre otras cosas, que no esperaremos que la Unidad Popular resuelva su crisis de dirección para desarrollar las iniciativas de activación y movilización social que hoy resultan impostergables y que el pueblo de Chile reclama.

### 2. Sólo comprendiendo los cambios producidos por la dictadura en la sociedad chilena es posible encarar correctamente la lucha.

Resulta cada vez más evidente el hecho de que la dictadura impulsa un proyecto global de dominación. Este se expresa en todos los aspectos de la vida del país. Tiene una perspectiva estratégica y se articula en forma coherente en sus modelos económico, político y de inserción internacional.

El sector clave en el surgimiento e implementación de este proyecto ha sido el conjunto de los grupos financieros nacionales li-

gados al proceso de transnacionalización. Factor determinante para dar viabilidad a este esfuerzo es la mantención de los sectores que en la actualidad componen el alto mando de la Fuerzas Armadas.

Después de casi siete años de dictadura, es posible advertir un conjunto de transformaciones muy importantes en la estructura productiva, en la composición social y en los elementos que integran la ideología dominante de la sociedad chilena. En consecuencia, las estrategias y los programas impulsados por la Unidad Popular antes de 1973 no constituyen ya instrumentos plenamente adecuados para dar solución a los problemas planteados por la dictadura.

En el plano de la estructura productiva industrial, se ha registrado un significativo desmantelamiento de sectores y ramas, se ha cerrado toda viabilidad a la complementación subregional con el retiro de Chile del Pacto Andino y se ha anulado el rol activador del estado en nuestro desarrollo.

En el sector agropecuario, la reforma agraria ha sido desarticulada sin dar lugar a una recomposición homogénea del antiguo latifundio y su correspondiente organización social. Junto a éste, que sigue predominando en la zona sur del país, encontramos en la zona central un nuevo tipo de empresa agrícola, de corte capitalista moderno. En superficies medianas funciona a base de una creciente mecanización y tecnificación, que produce con miras a la exportación. Este nuevo tipo de propiedad agrícola capitalista ocupa escaso número de trabajadores - la mayoría de ellos en forma estacional - dislocando así la fuerza social del antiguo inquilino. El viejo latifundio ha sido reemplazado también por un nuevo tipo de propiedad agrícola, vinculando estrechamente al sector financiero y a la economía urbana.

El sector financiero, por su parte, ha pasado a ser el que comanda la economía chilena, determinando su carácter predominantemente especulativo. Esto explica que, a pesar de que el proceso de concentración económica ha generado enormes excedentes, haya caído en estos años la tasa histórica de inversión productiva del país. Es necesario considerar el hecho de que este sector constituye el segmento más internacionalizado de nuestra economía. Debido a esto, el modelo económico de la dictadura se coloca al servicio de los esquemas mundiales de acumulación y división productiva, hace depender el funcionamiento de la economía chilena de los créditos de la banca privada internacional y corta toda expectativa de desarrollo autónomo del país.

Naturalmente, los cambios registrados en la estructura productiva tienen su reflejo en la estructura de clases. Chile es un país que ha visto reducirse drásticamente el crecimiento porcentual de su población económicamente activa. Una inmensa masa de cesantes y subocupados ha sido situada en los márgenes del sistema. Se pretende marginalizar en forma indefinida a un tercio de los chilenos para los cuales no hay espacio, ni en el modelo ni en el país. La clase obrera urbana - trabajadores industriales, de la construcción y mineros - ha sido jibarizada. Esto afecta a sectores que desempeñaron un rol muy dinámico en la lucha social del pasado.



En el campo, también se ha producido una reducción del los porcentajes de la mano de obra. A ello se suma un cambio sustancial en las relaciones de producción.

En las capas medias se manifiestan, igualmente, importantes cambios y reajustes. La reducción de los aparatos estatales y la caída de la demanda de trabajadores industriales especializados desplaza a una gran masa de chilenos hacia actividades de servicio, provocando la aparición de nuevos sectores medios, muy pauperizados y débilmente organizados.

Por último, la clase dominante experimenta hoy, asimismo, significativas mutaciones. Junto al proceso de concentración del poder económico en manos de unos pocos grandes grupos financieros, se verifica la presencia de una pequeña y mediana burguesía, vinculada a las actividades de exportación, e importación, y al suministro de servicios y productos suntuarios destinados a los restringidos sectores de más altos ingresos.

Transformaciones igualmente importantes se verifican en el contenido de la ideología dominante, en las ideas que intenta difundir y afianzar la dictadura. Aunque ésta no está en condiciones de imponer la visión global de una sociedad autoritaria al servicio de una minoría, puede imponer, sin embargo, con márgenes variables, algunas construcciones ideológicas que tienden a legitimar los intereses materiales de quienes la apoyan. Entre ellas, es posible señalar: el intento de descalificar la actividad política y la capacidad del pueblo para ejercer la democracia; la exaltación de la competencia y el éxito individual como mecanismos destinados a sustituir la solidaridad de personas y grupos; la promoción del consumo desmesurado de bienes suntuarios; la presentación de la inversión extranjera y las empresas transnacionales como los agentes principales del progreso y el desarrollo; el intento de devalorizar la iniciativa pública en áreas esenciales para la satisfacción de necesidades básicas del pueblo -educación, salud, vivienda-; y la exaltación de un concepto de eficiencia, funcional al sistema de libre mercado y libre explotación, que deja ociosos grandes recursos productivos y subordina la resolución de los problemas más angustiosos de las mayorías a las pautas del éxito financiero.

El dominio casi absoluto sobre los medios de comunicación que la dictadura ejerce ha permitido a ésta difundir persistentemente esas ideas y esos valores. Resulta indispensable tenerlo en cuenta en el trabajo del movimiento popular. Hay que demostrar que todo ello oculta el egoísmo y la inmoralidad de los sostenedores de la dictadura y el carácter antinacional, antidemocrático y antipopular del proyecto que tratan de imponer.

### 3. La crisis de la izquierda.

Frente a las regresivas transformaciones producidas en la sociedad chilena y ante el proceso de creciente personalización del poder en manos de Pinochet, las fuerzas de la izquierda han exhibido graves deficiencias. Se han mostrado incapaces, hasta la fecha, de proporcionar una conducción política a la lucha por derrocar a la dictadura. En 1976 se inició un período caracteriza-

do por el desfase entre la recuperación del movimiento popular y el agravamiento de los problemas de la dirección superior de la izquierda chilena.

Desde ese año, en efecto, nuestro pueblo ha venido revitalizando, a través de distintas instancias, las organizaciones que lo expresan. En un primero momento se rearticulaban las organizaciones sindicales, llegando a constituir direcciones nacionales para plantear sus reivindicaciones. En el campo estudiantil, múltiples expresiones orgánicas han dado cauce a las exigencias por reestablecer la libertad de pensamiento, a las demandas de autonomía de las universidades y del movimiento estudiantil y al rechazo de los planes y programas de la educación oficial. Algo más tarde, los pobladores y campesinos han empezado a reestructurar también sus organizaciones naturales y a levantar plataformas reivindicativas en relación a sus agudos problemas.

El rechazo a la dictadura se ha extendido también a importantes sectores medios. Fracciones de los colegios profesionales, organizaciones de empleados y pequeños productores, han formulado críticas substanciales a la política oficial y demandas de un tratamiento más favorable.

A esto se puede agregar las condiciones políticas internacionales que ha enfrentado Pinochet. Estas no podrían haber sido más desfavorables: ruptura de relaciones con Bolivia; retiro del Pacto Andino; expulsión del movimiento de no alineados; abierto conflicto con Argentina, todavía no resuelto, que tuvo al país al borde de la guerra a fines de 1978; expulsión del embajador chileno en Perú; suspensión de relaciones diplomáticas con países tan importantes como México, Italia, Suecia; condena abrumadora en la Asamblea General de Naciones Unidas, durante cinco años consecutivos; inusitada cancelación -en pleno vuelo- de la invitación que el gobierno de Filipinas había formulado a Pinochet.

En síntesis, este cuadro de recuperación del movimiento popular desde su base, en una línea de rechazo a la dictadura, unido a la mantención de su aislamiento internacional, suministra fundamentos objetivos muy favorables para la iniciación de un proceso de resistencia efectiva que conduzca a la liquidación del régimen actual.

Pese a ello, la iniciativa política de la izquierda ha ido declinando, hasta configurar una situación que permite hablar con propiedad de una crisis de la izquierda. Esta se expresa, principalmente, en la Unidad Popular. Esto, precisamente porque ella constituyó en el pasado su expresión orgánica más significativa. En la actualidad, la Unidad Popular se encuentra virtualmente paralizada. Su Comité Político exterior no puede reunirse desde hace dos años y esta situación amenaza con extenderse al interior de Chile, como una consecuencia tardía de la división del Partido Socialista.

Consideramos que tales problemas han llegado a un límite que impone, por razones políticas y éticas, a las diversas organizaciones de la izquierda chilena, la realización de todos esfuerzos necesarios para superarlos.

Bloqueadas las instancias orgánicas unitarias, se torna para



la Izquierda Cristiana una exigencia inaplazable el impulsar con autonomía todo tipo de iniciativas encaminadas a romper el inmovilismo y reactivar la lucha contra la dictadura.

Al asumir desde ahora como nuestra propia responsabilidad orgánica y política el desatar las ofensivas que conduzcan a la reactivación de las luchas de nuestro pueblo, lo hacemos en un contexto que liga las cuestiones tácticas con las estratégicas, los problemas de hoy con las expectativas de mañana, el combate contra las formas actuales de injusticia y dominación con las exigencias de perfilar una alternativa clara para Chile.

La tarea política de hoy se concreta, así, en dos esfuerzos centrales: la formulación de un proyecto histórico que exprese el tipo de sociedad por la cual opta el movimiento popular chileno y la puesta en marcha de una gran movilización de masas que, sobre la base de las organizaciones sociales que se ha dado nuestro pueblo, inicie las acciones encaminadas a cercar al régimen de Pinochet.

Por nuestra parte, emplearemos todas las formas de lucha que la tradición cristiana ha considerado legítimas para enfrentar a las tiranías.

#### 4. Las contradicciones fundamentales que se plantean entre la dictadura de Pinochet y el conjunto del pueblo chileno.

Entre la dictadura de Pinochet y el pueblo chileno se plantean, en forma permanente, diversos e insalvables contradicciones. Las tres más importantes son:

- El conflicto entre el carácter autoritario y represivo del modelo político y las aspiraciones de democracia, libertad y respeto a los derechos humanos de la inmensa mayoría de los chilenos;

- El conflicto entre el carácter concentrador del modelo económico que permite la opulencia de unos pocos y la extrema miseria y explotación que afecta a los trabajadores;

- El conflicto entre el carácter desnacionalizador de un modelo que debilita todas las bases de independencia y soberanía efectivas del país y la gran voluntad de afirmación nacional y de búsqueda de un desarrollo con independencia y control sobre las riquezas fundamentales del país que anima a la mayoría patriótica.

En la actualidad, la voluntad de resolver estas contradicciones en favor del pueblo chileno pasa por la liquidación del régimen implantado después del golpe de estado de 1973. Esto, a su vez, hace más urgente la tarea de derrocar a la dictadura, para abrir cauce a un proceso continuado de democratización y cambio social.

Asumir el objetivo democrático exige tomar conciencia de la incompatibilidad que hoy se verifica en Chile entre la democracia y el capitalismo.

Si bien las ideas liberales florecieron junto al capitalismo, la institucionalidad democrática surgida en torno a él fue sim-

pre estrecha y reservada a una minoría. La ampliación de las libertades ha sido un resultado de la lucha popular. En el capitalismo desarrollado, la ampliación democrática, en sus dimensiones económicas y sociales, pudo verificarse debido al mayor desarrollo de las fuerzas productivas. En el capitalismo periférico dependiente, en cambio, la coexistencia de la democracia política y la democracia económica es mucho más volátil y frágil. La democracia queda limitada a su expresión política, muchas veces formal. Sólo efectuando transformaciones estructurales, tanto en las formas de propiedad y participación como en la función directriz del Estado para modificar el modo de acumulación y el patrón de producción, se podrá sustentar una democracia más amplia.

En el caso chileno, semejante incompatibilidad entre democracia y capitalismo resulta particularmente válida. En nuestro país, fue la propia burguesía la que definió la incompatibilidad entre ambos procesos, al optar por la implantación de un régimen político autoritario y antidemocrático para asegurar la supervivencia de los patrones de desarrollo capitalista. Por eso, no existe en Chile una burguesía nacional disponible para la empresa democrático-liberal. Quienes han buscado una derecha democrática para asociarse con ella, acabarán por rendirse a la evidencia de que, simplemente, no existe.

En ese contexto, el único proyecto que a los partidarios del capitalismo les resulta posible proponer es el de una democracia restringida. Conviene detenerse en la lógica de esta opción: probablemente ella conlleve una retórica de modernización, reforma y apertura democrática. Semejante fórmula encontrará, sin embargo, la imposibilidad de estabilizarse tanto por la función fiscalizadora que mantendrá una cúpula militar no renovada como por la contradicción no resuelta entre los objetivos democráticos y las pautas fundamentales del modelo económico vigente, aunque se considere la introducción de enmiendas parciales en el funcionamiento de éste. Por ello, nos parece claro que los partidos democráticos que se embarcaran en una aventura como esa terminarían por negar su propia esencia y por hipotecar el apoyo de los sectores populares que hoy expresan.

#### 5. Un proyecto democrático, nacional y popular.

La supuesta incompatibilidad entre socialismo y democracia es una consigna ideológica de los grupos dominantes. Dentro de nuestra visión estratégica, en cambio, democracia y socialismo son dos vertientes que confluyen.

Sólo una base económica socialista puede dar sustento material a la democracia. Sólo el socialismo puede permitir la estabilidad, profundización y ampliación de la democracia. Como lo dijimos en nuestro primer Congreso, la "vinculación profunda entre democracia y socialismo es el factor que asegurará en el futuro un proceso constante y sostenido de traspaso de la riqueza y el poder político en favor de la mayoría del pueblo chileno".

Participación, autogestión y mayor igualdad pueden producirse y sostenerse únicamente en una economía y una cultura que avancen al socialismo.



Un nuevo proyecto político debe expresar, en primer lugar, los intereses presentes y futuros del pueblo chileno. Su fuerza nace de la legitimidad que gozará entre los más vastos grupos sociales.

Pero, al mismo tiempo, es un proyecto popular cuyo propósito es proponer a una mayor igualdad económica social y política y a elevar la organización y participación de los grupos pobres y oprimidos en la conducción del estado y la sociedad.

No es un proyecto sólo de la clase obrera. Tal proyecto aislaría al proletariado y, por ende, constituiría un error. Las clases pobres en general deben luchar por un proyecto que represente, auténticamente, los intereses fundamentales de la gran mayoría del país.

Proponemos una estrategia popular. Dentro del bloque social que abra paso a la democracia lucharemos por la hegemonía de las clases pobres y oprimidas en un marco de pluralismo. Sólo conquistando esa hegemonía se logrará avanzar hacia una sociedad más justa. Pero la hegemonía no es una condición que se negocia en forma previa a la articulación de una alianza. Es una posición que se conquista.

Sabemos que el proceso de creación de una nueva sociedad se confunde con el proceso de liberación y de predominio de la clase obrera y los trabajadores.

Pero también tenemos en cuenta que en la actual estructura social de Chile el proletariado, en su definición más estricta, no alcanza el 25 % de la población. Existen, simultáneamente, los campesinos, los trabajadores por cuenta propia, los empleados públicos y privados y una gran cantidad de chilenos cesantes.

En las economías capitalistas periféricas, la estructura productiva engendra un sector social urbano que se articula en torno a actividades terciarias y a servicios variados. Son ellos una gran mayoría dispersa. También la evolución de las fuerzas productivas modernas impulsa a la automatización y a la administración computarizada. Ello conlleva la expansión de las actividades de servicios a costa de una contracción proporcional del trabajo obrero.

Por tanto, un nuevo proyecto político debe expresar no sólo los intereses reivindicativos inmediatos de la clase obrera, sino los intereses permanentes de todo el conjunto de las clases y capas explotadas, oprimidas y marginadas. Más concretamente, la racionalidad básica del proyecto descansa sobre la exigencia de satisfacer de manera inmediata las necesidades mínimas de los sectores pobres y desocupados del campo y la ciudad, aun antes de su incorporación regular al mercado del trabajo.

La búsqueda de alianzas entre el movimiento popular y el resto de los sectores sociales debe tomar en cuenta el carácter prioritario de los objetivos descritos y, con ello, la necesidad de extender al máximo la eficacia de las motivaciones morales de solidaridad en la conducta política de los sectores comparativamente privilegiados. Esta circunstancia se ve favorecida, en la actualidad, por la amplitud cada vez mayor que presenta la lucha por la defensa de los derechos humanos en nuestro país y en todo el mundo.

Un nuevo proyecto político debe proponer una nueva visión de Chile, y asumir los intereses superiores de la nación.

Este proyecto político es capaz de dar respuesta a los principales problemas nacionales porque asegura la unidad interna de su pueblo, garantiza un desarrollo económico autónomo y pujante y afianza la fortaleza de las instituciones democráticas, base de respeto y prestigio internacional.

Un proyecto nacional ofrece una nueva respuesta a los problemas de la seguridad nacional. La fundamenta en la unidad del frente interno y en un frente externo resguardado por la diplomacia de un gobierno democrático legítimo, por la economía de un pueblo participante y por la solidez de unas Fuerzas Armadas respetuosas del orden institucional y unidas con su pueblo.

En el bloque de fuerzas que sustenta la construcción del proyecto político nacional, democrático y popular tienen que participar amplios grupos de la oficialidad y los soldados democráticos de las Fuerzas Armadas Chilenas.

Su participación en este bloque supone la erradicación del fascismo y el reemplazo de los conceptos de la actual teoría de la seguridad nacional. Esta se afirma en la represión, la violación de los derechos humanos y la subordinación a intereses militares externos.

Por eso mismo, la participación de estas fuerzas pasa por un proceso de formulación de una doctrina de la seguridad nacional que, verdaderamente, resguarde los intereses superiores de la nación, su pueblo y su territorio.

## 6. El proceso de convergencia socialista como instrumento para desatar una nueva dinámica.

En torno a estas ideas constitutivas de las bases de un nuevo proyecto histórico para la sociedad chilena se ha ido produciendo, en el último tiempo, un rico y variado debate entre diversos sectores de la izquierda chilena. El apunta, en último término, a la exploración de nuevos estilos para hacer política y de nuevos cauces orgánicos para emprender la realización de dicho proyecto. A partir de la declaración de ciudad de México suscrita en mayo de 1979 por el MAPU, el Mapu Obrero Campesino y por nuestro partido, esta perspectiva ha dado lugar a exploraciones más concretas en lo que se ha denominado convergencia socialista. Importantes y representativos grupos y seminarios de estudio se han ocupado, en el exterior y en el interior de Chile, de ampliar los fundamentos teóricos y orgánicos de esta propuesta.

Creemos que hoy existen condiciones para formular en términos muy precisos nuestra posición en torno a este tema.

La Izquierda Cristiana expresa su disposición a participar y activar el proceso de convergencia socialista. Considera que este no puede ser entendido como una suma o fusión de algunos de los partidos que integran la Unidad Popular. Tal perspectiva, por lo demás, reduce su proyección y alcance más profundo. Para nosotros, la convergencia socialista es, principalmente, un pro-



ceso de coordinación de fuerzas que apuntan a los objetivos comunes de activar la movilización popular orientada al derrocamiento de la dictadura y de estructurar el proyecto histórico que afiance los objetivos de la democracia y el socialismo.

Estamos convencidos de que el desencadenamiento de esta dinámica política pueda llegar a interpretar a sectores muy amplios del movimiento popular y a diversas fuerzas políticas de izquierda. En tal perspectiva trabajaremos. Con todo, este esfuerzo requiere de un impulso inicial que debe producirse a la brevedad posible.

Dada la actual situación de la izquierda, pensamos que la responsabilidad de dar impulso corresponde a los partidos que suscribiéramos la declaración de México, así como a importantes sectores independientes de izquierda. Mucho de estos ya han expresado su opción por este camino y han participado con valiosos aportes en la lucha popular y en los diálogos hasta ahora realizados.

Formulamos, por lo tanto, un llamado a las direcciones superiores de los partidos MAPU y MAPU OC para constituir, en el más breve plazo, un comité de enlace para el desarrollo de las luchas populares contra la dictadura que, a lo menos, pueda abordar en el período próximo las siguientes tareas:

a.- La elaboración de un completo diagnóstico acerca de la realidad política, económica, social, militar e internacional de Chile en la actualidad;

b.- La preparación de las bases de un proyecto democrático, popular y nacional para Chile, que abra perspectivas a la formulación de una alternativa amplia y unitaria que surja de las fuerzas democráticas chilenas;

c.- La constitución, en el interior de Chile, a partir de nuestras propias fuerzas, pero en la perspectiva de una convocatoria muy amplia a las organizaciones sociales y populares existentes, de frentes de movilización y resistencia. Particularmente importante nos parece este esfuerzo en los sectores sindical, estudiantil, poblacional y campesino. Contamos allí con una base inicial de representación significativa. El esfuerzo en cada uno de estos campos debe apuntar a la definición de plataformas especializadas, de carácter nacional y local. A partir de allí debe buscarse una articulación de las diferentes demandas, de tal manera de hacerlas confluir hacia un cuestionamiento global de la dictadura misma;

d.- Concertar acciones comunes con la Democracia Cristiana, que aseguren la más amplia movilización de los sectores democráticos;

e.- Continuar con los esfuerzos encaminados a favorecer la normalización de la Unidad Popular;

f.- Preparar en conjunto iniciativas que ayuden a elevar el nivel y calidad de la solidaridad internacional;

g.- Estimular todas las iniciativas encaminadas a fortalecer la convergencia socialista.

Entendemos la convergencia socialista como una iniciativa que no pretende el aislamiento del Partido Comunista o la división de la izquierda. Nos damos cuenta que frente a problemas tales como el debate contemporáneo en torno a las modalidades de democracia y socialismo, las concepciones sobre hegemonía al interior de la izquierda, el enjuiciamiento de situaciones y procesos internacionales concretos, hay distintas opiniones entre el Partido Comunista y nosotros. Las entendemos como algo natural, tratándose de organizaciones distintas. Pensamos que es conveniente no eludir la confrontación de esas diferencias, sino, al contrario, expresarlas mediante una discusión franca, fraternal y creadora. Nuestra disposición fundamental apunta a la máxima unidad posible en función de los intereses superiores de los trabajadores y el pueblo chileno.

El movimiento popular tendrá que seguir buscando la concertación de todas las fuerzas políticas y sociales que se oponen a la dictadura y se proponen derribarla. En este marco, vemos las relaciones con la Democracia Cristiana en torno al desarrollo de acciones comunes concretas, de carácter amplio en todo los frentes sociales en que ello sea posible. Por lo demás, una línea propiciando la movilización social ha sido ya públicamente planteada por la dirección de la Democracia Cristiana. En una perspectiva estratégica, nos parece que el conjunto del movimiento popular debe tomar en cuenta la presencia significativa en ese partido de sectores sociales y corrientes de opinión que pueden llegar a considerarse con seriedad una perspectiva a la vez socialista y democrática. Nuestra dedición de impulsar el proceso de activación de la lucha popular contra la dictadura no depende, sin embargo, de la posibilidad de lograr acuerdos previos con la Democracia Cristiana.

#### 7. La nueva significación de los cristianos en las luchas de liberación de América Latina y Chile.

La presencia creciente de cristianos en las luchas de los pueblos por alcanzar su liberación es uno de los principales rasgos del proceso político contemporáneo en nuestro continente.

En los catorce años que median entre la muerte en combate de Camilo Torres y el brutal asesinato de Monseñor Romero, la significación de lo cristiano ha pasado del testimonio profético al compromiso de masas en la búsqueda de una sociedad nueva y mejor.

Más de ochocientos sacerdotes y religiosas han sufrido la tortura, la prisión, el desaparecimiento o la muerte. Nombres de cristianos como Néstor Paz y Luis Espinal en Bolivia, Henrique Pereira en Brasil, el sacerdote campesino Rutilio Grande en El Salvador, el Comandante sandinista Gaspar García Laviana en Nicaragua, Juan Alsina y Arturo Riveros en Chile, están en la lista de los mártires más puros y ejemplares que nuestros pueblos han visto surgir en estos años.

Formas nuevas de reflexión religiosa que, como la Teología de la Liberación, intantan una interpretación y una práctica de la fe y de los valores cristianos desde la perspectiva de los pobres y los oprimidos; y formas nuevas de expresión orgánica, como las comunidades cristianas de base, de las que sólo en Bra-